

## **RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN ST-0999 DE 2025**

### **Señores**

Ministerio del Interior

Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa

**Referencia:** Recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución ST-0999 del 14 de julio de 2025

**Yo, ANA PATRICIA JULIO GORDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.038.105.839, en calidad de representante legal del **Consejo Comunitario Afroverde**, comunidad étnica afrodescendiente asentada históricamente en el municipio de Puerto Asís (Putumayo), en ejercicio de los derechos fundamentales a la consulta previa, a la participación efectiva y a la protección del territorio y la identidad cultural, interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN** contra la Resolución de la referencia, notificado por conducta concluyente el día 15 de julio de 2025, sustentado en los siguientes:

### **I. DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA Y SU BLOQUE DE PROTECCIÓN**

El derecho a la consulta previa es un derecho fundamental de naturaleza colectiva, reconocido expresamente por la Constitución (artículos 1, 7, 40, 70, 72, 329 y 330), el Convenio 169 de la OIT (arts. 6, 7, 15 y 16), la jurisprudencia constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos.

Es de aplicación obligatoria, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. No es un favor del Estado ni un beneficio sujeto a validación técnica. Es una garantía jurídica estructural del derecho a la identidad, al territorio, al proyecto de vida y a la autonomía cultural.

La **Sentencia SU-123 de 2018** reitera que el deber de consultar no depende de la existencia de daño material, sino de **la posibilidad real de afectación directa a cualquier dimensión del pueblo étnico**: cultural, espiritual, ambiental, territorial, económica, organizativa o simbólica.

### **II. PRINCIPIO IN DUBIO PRO COMMUNITAS Y PRECAUCIÓN JURÍDICA**

Este principio —aplicado en las sentencias **T-129/11**, **SU-039/97** y **T-547/10**— establece que **ante la duda razonable sobre la presencia o afectación a una comunidad étnica, se debe actuar en su favor**. En lugar de exigirle a la comunidad pruebas técnicas georreferenciadas, el Estado debe suspender decisiones administrativas hasta tanto no haya claridad completa.

La Corte ha sostenido que este principio **emana del bloque de constitucionalidad, del principio pro homine, de la favorabilidad étnica y de la especial protección constitucional**.

En este caso, la propia Dirección identificó:

- Viviendas dentro del área del proyecto.

- Caminos de uso ritual y cotidiano cruzando la zona.
- Testimonios de uso espiritual y cultural del territorio.

Ante eso, **el deber era ordenar la consulta previa**, no negarla.

### III. CONTEXTO GENERAL DE LA COMUNIDAD Y DEL TERRITORIO

El Consejo Comunitario Afroverde está conformado por familias afrodescendientes asentadas ancestralmente en las veredas Quebradon ,Alea, Peneya, Monteverde, Bajo Mansoyá y Camelias del municipio de Puerto Asís, Putumayo. Aunque su reconocimiento formal es reciente, la ocupación del territorio, la transmisión intergeneracional de saberes, la defensa de sus costumbres y el tejido social colectivo han existido desde hace décadas, evidenciando una presencia viva, activa y cohesionada.

Esta comunidad no es una creación jurídica sino una realidad social, histórica y espiritual. El territorio no es simplemente el lugar donde se habita: es el eje sagrado que estructura su cultura, su economía, su espiritualidad y su sentido de vida. Los caminos ancestrales, los espacios sagrados en la selva, los ríos usados para rituales de armonización, las quebradas para el baño espiritual, los árboles para la medicina tradicional y los lugares de reunión comunitaria no son solo elementos físicos, sino expresiones materiales de un vínculo espiritual y cultural profundo.

El Consejo Afroverde vive de sus prácticas agrícolas tradicionales, del cuidado del monte, de la pesca artesanal, de la recolección de frutos silvestres y plantas curativas, del cultivo colectivo y del trabajo en minga. Cada actividad, cada gesto comunitario, está mediado por una visión del mundo que integra lo visible y lo invisible, lo material y lo simbólico. Las parteras, los sabedores, los líderes espirituales y culturales mantienen viva una cosmovisión afrodescendiente que no puede desligarse del territorio sin provocar su desaparición como pueblo.

El territorio constituye el **espacio de vida integral** de la comunidad. Es allí donde se expresan las prácticas espirituales como la armonización con plantas curativas, los baños en quebradas sagradas, los rituales colectivos de protección, las limpiezas espirituales y los recorridos por caminos tradicionales acompañados de cantos, silencio y contemplación. Es también el lugar donde los sabedores tradicionales transmiten conocimiento a los niños, donde las parteras atienden los nacimientos y donde las mujeres y hombres trabajan en mingas como expresión de solidaridad ancestral.

En lo económico, el territorio es la base del sustento colectivo: las familias viven del cultivo de yuca, plátano, maíz, frutas, del uso de plantas medicinales y de la pesca artesanal. Muchas de estas actividades no son individuales, sino comunitarias, enraizadas en formas de trabajo colectivo que integran el calendario ecológico, las fases lunares y las recomendaciones espirituales de los mayores.

Por tanto, el despojo no requiere expulsión física: basta que se altere el entorno natural, se impida el acceso, se genere miedo o se cierre un camino sagrado para que se inicie una

forma de **desarraigo espiritual, simbólico y social**, como lo ha reconocido la jurisprudencia nacional e internacional.

#### IV. SOBRE LA RESOLUCIÓN ST-0999 DE 2025

La Resolución impugnada concluye que no hay afectación directa al Consejo Comunitario Afroverde por parte del proyecto de modificación de la Licencia Global del Bloque Platanillo, y por ende, no procede el derecho a la consulta previa. Esta conclusión omite considerar elementos esenciales del contexto socio territorial, espiritual, cultural y jurídico, y se aparta de los estándares nacionales e internacionales que regulan el derecho a la consulta previa.

Durante la visita de campo realizada por la Dirección Técnica entre el 17 y 19 de octubre de 2024, se constató la presencia efectiva y viva del Consejo Afroverde dentro del área de influencia del proyecto. Se realizaron talleres, entrevistas, ejercicios de cartografía social y recorridos participativos que dejaron claro que:

- Existen viviendas, cultivos y fuentes de agua utilizadas por la comunidad dentro del polígono del proyecto.
- Hay caminos tradicionales que comunican las veredas y que son usados para fines culturales, espirituales y económicos.
- Se identificaron zonas utilizadas para rituales de sanación, armonización espiritual, recolección de plantas medicinales y encuentros colectivos.

Pese a esta constatación, la Resolución desestima esta información, otorga mayor valor a los documentos presentados por la empresa proponente y aplica un criterio técnico restrictivo que desconoce el enfoque diferencial que debe guiar las decisiones del Estado frente a comunidades étnicas.

La Resolución ST-0999 del 14 de julio de 2025 es el resultado de un análisis técnico y jurídico que, lamentablemente, **desconoce la realidad viva y compleja del Consejo Comunitario Afroverde**. A pesar de haberse constatado la presencia de integrantes de la comunidad en el área de influencia del proyecto, y de haberse identificado elementos tangibles e intangibles de su territorialidad, la Resolución concluye que **no hay lugar a consulta previa**, basándose en una interpretación fragmentaria, restrictiva y descontextualizada del principio de “afectación directa”.

Durante la visita de campo realizada entre el 17 y el 19 de octubre de 2024, funcionarios del Ministerio recogieron testimonios, participaron en talleres comunitarios, caminaron con los mayores los caminos tradicionales y presenciaron directamente las viviendas, cultivos, fuentes de agua y espacios de uso ritual dentro del polígono del proyecto petrolero. Sin embargo, en lugar de asumir esta información como indicio suficiente para activar la garantía de la consulta previa —como lo exige el principio de precaución y el enfoque diferencial—, la autoridad la descartó, priorizando los informes cartográficos de la empresa proponente.

Esto configura una vulneración al **derecho a la participación informada**, pues la comunidad fue escuchada formalmente, pero su palabra fue deslegitimada frente al peso de la técnica institucional. Se incumplió el deber de **interpretación intercultural**, que exige valorar el conocimiento propio y los métodos de identificación territorial de los pueblos étnicos (cartografía social, mapas hablados, calendarios culturales, etc.).

Además, la Resolución ignora los impactos acumulados de décadas de actividad extractiva en la zona: contaminación de fuentes hídricas, desplazamiento de fauna, pérdida de biodiversidad, conflictos sociales, desconfianza institucional, criminalización del liderazgo afro y afectaciones profundas a la autonomía comunitaria.

Lo más grave es que se toma una decisión definitiva sin aplicar el **principio de precaución**, sin considerar que cualquier duda debe resolverse en favor del grupo étnico y sin activar las salvaguardas que ordena el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia consolidada de la Corte Constitucional.

## **V. AFECTACIONES ESPIRITUALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS**

El paso de maquinaria, los derrames, la modificación del paisaje sonoro y visual, y el cierre o militarización de caminos **rompen ese equilibrio espiritual**. Esto no es un argumento simbólico: es un daño cultural concreto, que según la Corte Constitucional (T-769/09, SU-383/03), **equivale a una forma de desplazamiento espiritual y simbólico**.

La economía de la comunidad se basa en:

- Cultivo tradicional de pancoger.
- Recolección de frutos y leña.
- Pesca en quebradas limpias.
- Trabajo en minga, ventas solidarias, trueque cultural.

La actividad petrolera afecta:

- Las fuentes de agua de las que depende la agricultura.
- El acceso a caminos rurales para transportar cosechas.
- El equilibrio de los ciclos agrícolas por contaminación y vibración.
- El miedo a sembrar cerca de áreas restringidas.

En lo organizativo:

- Se ha fragmentado la comunidad por la imposición de límites.
- Hay miedo de reunirse por temor a ser malinterpretados como opositores.
- Se debilita el liderazgo tradicional cuando el Estado deslegitima su palabra.

- Al no ser registrados, argumento que la empresa ha señalado y sostenido en diferentes espacios, discriminan a la comunidad para la participación de cupos laborales en la empresa.

## VI. CASOS JURISPRUDENCIALES APLICABLES

- **SU-383 de 2003 (Pueblo U'wa):** se protegió la dimensión espiritual del territorio sin necesidad de prueba técnica.
- **T-769 de 2009 (La Toma, Cauca):** se reconoció afectación directa aunque no existiera título colectivo.
- **T-129 de 2011:** estableció que ante duda razonable debe consultarse.
- **Corte IDH – Saramaka vs. Surinam:** cualquier afectación espiritual o territorial debe contar con consentimiento previo e informado.

## VII. PETICIONES

1. **Solicito que se revoque en su totalidad la Resolución ST-0999 de 2025**, por haberse adoptado desconociendo la presencia efectiva, cultural, espiritual y territorial del Consejo Comunitario Afroverde, así como los estándares de garantía constitucional e internacional que rigen la consulta previa.
2. Que se ordene a la Dirección de Consulta Previa iniciar de inmediato el proceso de consulta previa con nuestra comunidad, bajo metodologías adecuadas, con garantías de buena fe, acompañamiento institucional y con respeto por nuestros tiempos y formas de deliberación.
3. En subsidio, que se conceda el recurso de apelación para que sea resuelto por la instancia superior, conforme a derecho y garantizando el principio de participación efectiva de los pueblos étnicos.



**ANA PATRICIA JULIO GORDO**  
**C.C. 1.038.105.839**  
**Representante Legal**  
**Consejo Comunitario Afro Verde**